

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2022 OCT 28 PM 8:11

GRANA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

ASUNTO: SE PROMUEVE
ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022.

H. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PRESENTES:

MARIO DELGADO CARRILLO, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, calidad jurídica que acredito con la respectiva certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, así como de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de los Estatutos de Morena; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en viaducto Tlalpan número 100, Oficinas de la representación de MORENA, en el anexo del edificio "A", planta baja, colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, en la Ciudad de México, y acreditando desde este momento, con fundamento en el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley a los a los profesionistas [REDACTED]

[REDACTED] ante

ustedes respetuosamente comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, con la representación que ostento, y con fundamento en el artículo 105, fracción II, primer y segundo párrafos, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 10, fracción I y 11 en relación con el 59; 60; 61; 62, tercer párrafo; y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38º inciso a) y demás aplicables del Estatuto de MORENA, vengo a interponer **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**, en los términos que a continuación se hacen valer, y en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria, manifestando lo siguiente:

ACTOR: MORENA, promoviendo por conducto del suscrito Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

ÓRGANOS RESPONSABLES.-

- a. **Legislativo**: El Congreso del Estado Libre y Soberano de México, que expidió el decreto que contiene las normas generales impugnadas.
- b. **Ejecutivo**: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, que promulgó y mandó publicar el decreto que contiene las normas generales cuya declaración de invalidez se solicita.

NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.- Lo constituye el "DECRETO NÚMERO 91, por el que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del

Código Electoral del Estado de México”, del cual se impugnan, en los términos que se aducen en los respectivos conceptos de invalidez:

1. Se impugna la adición el artículo 74 bis, del Código Electoral del Estado de México, que establece una nueva modalidad para conformar un gobierno de coalición, otorgando a las coaliciones o candidaturas comunes la posibilidad para postular personas candidatas Gobernador o Gobernadora bajo un acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa. Rompimiento del modelo de “gobierno de coalición” previsto en el artículo 77 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
2. Se impugna la **fracción XVIII, del artículo 390** del Código Electoral del Estado de México, que dispone una atribución adicional al Tribunal Electoral del Estado de México que consistente en la competencia para resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de dicho código, la cual colisiona frontalmente con lo previsto por la fracción XLVIII, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

MEDIO OFICIAL EN QUE FUERON PUBLICADAS LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS. - Es el Diario Oficial del Gobierno del Estado de México, en el No. 60, Tomo CCXIV, edición del viernes 30 de septiembre de 2022, consultable en el siguiente enlace electrónico:

<https://legislacion.edomex.gob.mx/calendario/dia/2022-09-30>

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES VIOLADOS.- Lo son los artículos 1o.; 16 primer párrafo, 40; 41 párrafos primero y tercero, base I; 74, fracción III; 76, fracción II; 89, fracciones II y XVII; 116, párrafos primero y segundo, así como la fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES:

Primero.- El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.” Los gobiernos de coalición encuentran su antecedente aquí su antecedente, en el que en los artículos 74, 76, fracción II y 89, fracción II, se da la posibilidad de que pueda haber un gobierno de coalición en el Ejecutivo, contando con una mayoría en el Legislativo.

Segundo.- El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y otros ordenamientos.

Tercero.- El 25 de julio de 2016, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el decreto número 102 en donde la Diputación Permanente de la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, mediante el cual declara aprobada la

reforma de los artículos 61, fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que permiten al Ejecutivo Estatal optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado; gobierno que deberá ser establecido por el convenio descrito previamente y el programa respectivo, debiendo ser aprobados por la Legislatura en los términos que señala la citada fracción XLVIII del artículo 77 y de acuerdo al convenio que establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Cuarto.- El 30 de septiembre de 2022, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el **DECRETO NÚMERO 91**, en donde la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México y en lo conducente, el Decreto por el que se expide la Ley de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los artículos 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Quinto.- La publicación del Decreto que contiene las normas generales referidas en el punto Cuarto que antecede, fue realizada, previa su promulgación por el Gobernador Constitucional del Estado, pero algunas de sus normas generales, por no ser conformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, en este escrito se combaten.

En ese contexto, y como se advierte al final de la publicación oficial, en la parte relativa a la promulgación del Decreto controvertido, aparece la siguiente orden del Gobernador del Estado de México:

“Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.”

Ello, no obstante la invalidez de las normas generales impugnadas en esta acción de inconstitucionalidad, o su deficiente regulación.

Lo expuesto con antelación de lugar a los siguientes:

CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ, mediante el cual se impugna el Decreto Número 91, en su porción normativa referente a la adición del artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México. Lo cual lesiona el principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica contenidos en el artículo 73, fracción XXIX-U y 133 constitucional.

Ello, en razón de que el emisor está legislando de manera directa sobre un tema expresamente reservado al Congreso de la Unión, como lo es en el caso particular lo referente a **las coaliciones**, configurándose de esta manera una invasión de competencias, por lo que se transgrede los principios de reserva de ley, subordinación jerárquica, de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación, vulnerando lo dispuesto en los artículos constitucionales 14; 16; 116 fracción IV inciso b); 122 apartado A, fracción IX; 124 y 133; así como la fracción I, inciso f) del artículo segundo transitorio del Decreto publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Son los artículos 1o., 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 35 fracciones I y II, 39, 40, 41 primer y tercer párrafos, base I, 124, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 23.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo segundo transitorio del *“decreto de reforma constitucional en materia política electoral”*, así como los demás preceptos que se invocan en lo que sigue.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. Como primer orden de ideas, es dable señalar que el sistema constitucional mexicano prevé un catálogo de disposiciones las cuales están concedidas de manera exclusiva a los funcionarios de nivel federal, consecuentemente aquellas facultades que no se encuentran reservadas a la federación podrán ser materia de competencia de los Estados y la Ciudad de México, así lo dispone el artículo 124 de la Constitución Federal.

En ese orden de ideas, las disposiciones constitucionales y las leyes generales emanadas de la propia Constitución, pueden otorgar la facultad exclusiva a alguno de los poderes de la Unión, ello a fin de que sea la federación quien tome las decisiones respecto de una temática en concreto.

En esa guisa, la figura de coaliciones fue conferida por la Constitución federal exclusivamente al Congreso de la Unión, y fue regulada en la Ley General de Partidos Políticos, específicamente en su TÍTULO NOVENO, por lo cual los artículos impugnados vulneran la esfera competencial del Congreso de la Unión. Además, el artículo 85, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos únicamente faculta a las entidades federativas a establecer en sus constituciones locales *“otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el*

fin de postular candidatos", enunciado normativo que descarta la posibilidad de que los Congresos Locales puedan regular la figura de las coaliciones de manera directa, pues estas fueron previstas en numerales distintos del artículo 85, por lo que debe entenderse que en todo caso el artículo 85 solamente facultaría a las entidades federativas para regular las candidaturas comunes, más no la figura de las coaliciones.

Consecuentemente el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia política electoral, en su fracción I, inciso f), dispone que se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, por lo que dicha figura únicamente puede estar regulada en la Ley General correspondiente, además de que así está dispuesto en el artículo 1 de dicha Ley.

Aún si se fuera a considerar que la cuestión es competencia local, el artículo controvertido tampoco es conforme con los preceptos, principios y garantías constitucionales así como con los principios contenidos en la Ley General de Partidos Políticos, pues la regulación tal y como se realizó en la disposición combatida constituye una conducta caprichosa y arbitraria en la emisión de leyes electorales, toda vez que al regular indebidamente la figura de coaliciones se incurrió en redundancia y disconformidad respecto de las bases constitucionales y la ley general de la materia.

Una vez precisado lo anterior, es importante manifestar que la prohibición que tienen los Estados para legislar sobre el tema de coaliciones, no es absoluta puesto que dentro de la libertad configurativa que poseen, estos pueden legislar sobre aspectos relacionados con el tema de coaliciones siempre y cuando se realice de manera **indirecta**, es decir que regule aspectos derivados de la figura

de coalición, más no así aspectos propios de la Constitución, alcances y término de la figura de coalición, puesto que en ese sentido, se estaría legislando de manera directa y nos encontramos ante una invasión de competencias como acontece en el caso en concreto.

Se afirma lo anterior, en función de que el artículo 74 bis, de la reforma combatida modifica sustancialmente y descontextualiza la figura de la coalición electoral, al introducir la posibilidad de registrar convenios de coalición desde el inicio de la etapa de precampaña del proceso electoral en el que se pacte de manera accesoria suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que los partidos que integren la coalición participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como la definición de la agenda legislativa de manera anticipada, es decir, antes del inicio del mandato del Gobernador electo de ser el caso. Lo anterior, distorsiona la finalidad de una coalición electoral, al regularse de manera directa que en conjunto a dicha alianza electoral, podrán pactarse las cuestiones relativas a las propuestas de designación de funcionarios y titulares de las Dependencias de la Administración Pública, pues ninguna designación de titulares de dependencias o órganos desconcentrados o descentralizados es posible sino hasta el inicio del periodo de mandato del Gobernador, por lo que antes de ese momento toda designación sería irregular.

Además, el artículo 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de México, permiten al Ejecutivo Estatal optar en cualquier momento de su mandato, por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado, por lo que se cuenta con la posibilidad de no cumplir la plataforma electoral de la coalición, situación que resulta contraria a la reforma en comento.

Asimismo, la reforma combatida es inconstitucional al pretender garantizar el cumplimiento de una plataforma electoral de las coaliciones electorales, pues el numeral 11 del artículo 87 de la Ley General mencionada, establece que, una vez concluida la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, termina automáticamente la coalición por la que hayan postulado candidatos, por lo que en ese sentido la reforma combatida, modifica también la vigencia de la figura de coalición, al prolongar su existencia más allá de la etapa de resultados.

Adicionalmente, no se puede perder de vista que la referida reforma introduce un aspecto extra no contemplado ni en la Constitución Federal, ni en la Ley General de Partidos Políticos, al establecer la obligación de registrar un acuerdo específico del tipo de coalición electoral emitida por los partidos políticos que integren la coalición electoral, pues lo anterior genera incertidumbre y conflictividad en la intervención del legislador en los asuntos internos, y excede las exigencias constitucionales y de la ley general respecto a los registros para coaliciones electorales, por lo que es evidente que nos encontramos ante una invasión de competencias del Congreso de la Unión, puesto que se está legislando de forma directa sobre la figura de coalición.

Al respecto, es necesario recordar que la reforma constitucional en materia político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce, estableció en los artículos 73, fracción XXIX-U, así como en el segundo transitorio, fracción I, inciso f), numerales 1 y 4, que el Congreso de la Unión en la Ley General de Partidos Políticos regularía, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales. En concordancia con lo resuelto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 23/2014 y sus acumuladas, definió que el régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley

general que expida en materia de partidos políticos, sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura.

En consecuencia, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar su marco jurídico electoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional.

Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas será inválida desde un punto de vista formal, por incompetencia de los órganos legislativos locales para regular al respecto.

En ese sentido, lo cierto es que en el presente caso el Congreso del Estado de México no se encuentra facultado para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, pues de acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, no se asignó a las entidades federativas facultad alguna para legislar en torno a los aspectos que, en materia de coaliciones, enumeró la norma transitoria referida, pues como ya se precisó, ésta es clara en ordenar que corresponde al legislador federal el establecimiento de un sistema uniforme para los procesos electorales federales y locales en materia de coaliciones, no existiendo una competencia residual de los Estados en este tópico.

Por lo que es dable afirmar que el artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México adicionado mediante el decreto número 91, resulta inconstitucional a la luz de que el régimen de coaliciones solo si puede ser regulado de manera directa por el Congreso de la Unión y no por el Congreso del Estado de México como acontece en el presente asunto.

Reafirma lo anterior, que en la exposición de motivos de la presente reforma al Código Electoral del Estado de México presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y los Diputados Enrique Vargas del Villar y Adrián Juárez Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hay un reconocimiento expreso de que la regulación de las coaliciones es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, esto, tal y como se muestra a continuación:

“Así bien, la regulación de las coaliciones es competencia del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio, fracción I, del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; y tratándose de candidaturas comunes o de otro tipo de alianzas electorales, existe la libertad de configuración legislativa para que los congresos locales legislen en torno a la participación de los partidos en los comicios locales (gobernador (a), diputado (as) locales y ayuntamientos”

[Lo resaltado es propio]

Por su parte, igualmente queda reconocida dicha facultad en el Dictamen emitido por las Comisiones unidas Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático, que señala lo siguiente:

*“De conformidad con este sistema se encuentran reguladas las alianzas electorales, sobresaliendo, la coalición y la candidatura común cuyas bases normativas se expresan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Leyes Generales de la materia y en la legislación aplicable, aclarando que, **la regulación de las coaliciones es competencia del Congreso de la Unión y en lo que se refiere a las candidaturas comunes u otras alianzas existe libertad de configuración legislativa de los Congresos Locales para legislar en la materia**”*

[Lo resaltado es propio]

Sin embargo, pese a tal reconocimiento, es claro que el decreto número 91, por el que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407 y se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México, contraviene la competencia del Congreso de la Unión e incurre en una invasión, la cual introduce elementos nuevos a la figura de coalición, esto, ya que el legislador local pretende justificar dicha adición en su libertad de configuración legislativa, tal como se desprende del Dictamen emitido por las Comisiones unidas Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático, que pretende hacer depender dicha invasión a la figura de coalición, por medio de la figura de candidatura común, tal como se muestra a continuación.

*“Advertimos, quienes integramos las comisiones legislativas, con apego al estudio realizado **que la iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito esencial favorecer en candidaturas comunes la integración de un programa de gobierno y un convenio, en relación con la designación de las Secretarías del Gobierno, Órganos Desconcentrados, Descentralizados o equivalentes con base en el Convenio respectivo**, a efecto de garantizar la participación permanente y continua de los partidos políticos que formaron parte de la alianza electoral, en la responsabilidad de involucrarse en la Administración Pública a través*

de su representación en las diversas Secretarías del Gobierno, Órganos Desconcentrados, Descentralizados o equivalentes”

[Lo resaltado es propio]

En esa guisa, como ya fue expuesto con anterioridad, podemos advertir que dicha invasión de competencias se produce a raíz de que el legislador local pretende introducir a través de una figura distinta, esto es, las candidaturas comunes, elementos adicionales a la figura de coalición, aunque más adelante, en el mismo dictamen se reconoce el verdadero objetivo, tal como se muestra a continuación:

“Coincidimos con las iniciativas en cuanto que los partidos políticos que suscriban un convenio de coalición o de candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, puedan suscribir un acuerdo específico en el que se establezcan la forma en la que estos participarán en la integración de la dependencia del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, lo que permitirá transitar al ejercicio democrático y plural en la estructura administrativa del poder ejecutivo estatal”

[Lo resaltado es propio]

De lo anterior podemos desprender que las reformas y adiciones que contiene el decreto que por este medio se señala su invalidez, guardan relación no únicamente a la figura de la candidatura común, sino también con la coalición, de tal manera que, resulta inconcuso que el Congreso Local del Estado de México invadió la competencia legislativa en torno a la mencionada figura de coalición, misma que fue convalidada en el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático.

Es por lo anterior que el decreto combatido debe considerarse inconstitucional al ser una invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, y en todo caso debe considerarse inconstitucional por las inconsistencias e ilegalidades de su contenido normativo.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ, se impugna la adición el artículo 74 bis, del Código Electoral del Estado de México, que establece una nueva modalidad para conformar un gobierno de coalición, otorgando a las coaliciones o candidaturas comunes la posibilidad para postular personas candidatas Gobernador o Gobernadora bajo un acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.

Por lo que la Legislatura local establece una nueva “modalidad” de gobierno de coalición como facultad de los partidos políticos, al registrar una coalición electoral o candidatura común, en caso de que la persona postulada para asumir la Gubernatura resulte electa. En este sentido, dicha “modalidad” no fue prevista por el Constituyente Local en la Constitución Política del estado.

La norma cuya invalidez se solicita declarar inconstitucional por exceder la facultad reglamentaria de la Legislatura del Estado, en sus porciones normativas subrayadas, establece:

“Artículo 74 bis. En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate”.

Lo anterior conlleva, entre otros a la vulneración de los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica pues a través de una norma secundaria se rompe el modelo de gobierno de coalición previsto primero, por el Constituyente federal y segundo por el Constituyente en la norma suprema del estado.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Son los artículos 16 primer párrafo, 40, 74, fracción III, 76, fracción II, 89, fracciones II y XVII, de la Constitución Federal.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Este Partido Político controvierte la constitucionalidad del artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México, por considerar que el legislador local excede sus facultades legislativas al crear a través de la legislación secundaria una nueva “modalidad” del gobierno de coalición no prevista en la Constitución Local; por lo que de manera inadecuada regula los gobiernos de coalición en la legislación electoral, sobre la base de que esta figura opera a partir del inicio de funciones del Gobernador o Gobernadora y antes; lo cual resulta violatorio de los

principios de supremacía constitucional, certeza y legalidad electorales, así como de las garantías de competencia, fundamentación, motivación, y seguridad jurídica y, en este sentido, de los artículos 16, párrafo primero, 40, 74 , fracción III, 76, fracción II, 89, fracciones II y XVII, 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

En efecto, como se ha establecido supra, el enunciado normativo impugnado, artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México, no es conforme con los preceptos, principios y garantías constitucionales invocados, porque, establece la posibilidad de que los partidos políticos que suscriban un convenio de coalición o participen en candidatura común puedan suscribir un Acuerdo específico en el que establezcan la forma en que participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa, sin embargo dicha adición resulta inconstitucional.

En primer término, debe recordarse que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como forma de organización política una República representativa, democrática, laica y federal. Asimismo, prevé la renovación periódica de los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, para ello la forma de acceder a los cargos de elección popular es por medio de las candidaturas independientes o de los partidos políticos, los cuales son la principal fuente de postulación de candidaturas.

Por lo que refiere a la segunda forma de postulación y siguiendo lo establecido en el artículo 41, fracción I, del ordenamiento constitucional, los partidos políticos definidos como entidades de interés público tienen entre sus principales fines promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, pueden participar en las elecciones al

postular candidaturas a cargos de elección popular, ya sea de forma individual o por medio de alianzas electorales.

Dichas alianzas electorales se resumen en las figuras de coaliciones y candidaturas comunes. Sin embargo, siempre deberán realizarse dentro del marco constitucional y legal, interpretando su contenido de tal forma que no se vulnere nuestro sistema democrático representativo.

Teniendo para ello en cuenta que la coalición y la candidatura común son alianzas de carácter temporal que se forman en los procesos electorales para postular a una misma candidatura a un determinado cargo de elección popular; estas se encuentran reguladas expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanan.

Para efectos del análisis de las normas impugnadas, debe atenderse a lo dispuesto por los artículos 74, fracción III, 76, fracción II, 89, fracciones II y XVII de la Constitución Federal y al artículo décimo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce:

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

(...)

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda; (...)."

"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; (...)."

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(...)

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

(...)

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. (...)"

" Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de

los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. (...)"

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

(...)

DÉCIMO SEGUNDO. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 69, párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018. (...)”

De los preceptos constitucionales citados, se desprende que el gobierno de coalición es, en términos generales, una alternativa de gobierno en la que el titular del poder ejecutivo puede optar libremente por construir una alianza con otros partidos políticos representados en la legislatura; de manera que algunos de los funcionarios públicos cuyo nombramiento originalmente sería facultad exclusiva de aquél serán nombrados con la participación de ésta. Dicha figura tiene por objeto formar acuerdos y llegar a consensos que permitan condiciones de gobernabilidad en un contexto dividido y pluripartidista.

Al respecto, la Constitución Política del estado libre y soberano de México, en sus artículos 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII, prevé:

“Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

(...)

LI. Ratificar los nombramientos que el Gobernador haga de los servidores públicos que integren su gabinete, cuando opte por un gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

(...)”

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del Estado:

(...)

XLVIII. Optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes en la sesión del pleno de la Legislatura donde se discuta. Si la Legislatura se encontrara en receso la Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura del Estado a un periodo extraordinario. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

(...)”

De lo anterior se advierte que el Constituyente Local previó una sola “modalidad” de gobierno de coalición, que se regulará con mayor detalle en por el convenio y el programa respectivos, muy similar a la establecida en la Constitución Federal (la cual responde a la naturaleza y características propias del gobierno de coalición, como atribución del titular del poder ejecutivo).

En este sentido, dicha modalidad no guarda relación con la materia electoral (al tratarse, más bien, de una cuestión político-administrativa), por lo que no es posible incluirla como parte de las reglas que habrán de seguirse en la preparación de una elección, ya que su inclusión constituye un traslado de facultades de una persona en ejercicio del cargo -gobernadora o gobernador- a los partidos políticos.

En efecto, el fin constitucional de los partidos políticos de acuerdo con el artículo 41 constitucional es permitir el acceso de las personas a los cargos del poder público, sin embargo, se cae en un exceso cuando, se les otorga la posibilidad de condicionar desde la postulación de una candidatura, el

pactar un acuerdo para un gobierno de coalición, ya que, se insiste, esa atribución está reservada para el cargo electo.

No obstante, mediante el decreto materia de controversia, en el que se adiciona el artículo 74 bis, para quedar como sigue:

"Artículo 74 bis. En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate.

Artículo 202. ...

I. y II. ...

III. Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios de coaliciones, fusión y los acuerdos de participación.

IV. a X. ...

Artículo 390. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este Código, de conformidad con lo previsto en Libro Séptimo del mismo.

XIX. Las demás que le otorga este Código.

Artículo 407. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales sólo será procedente el recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por:

I. a III. ...

IV. En cualquier momento, los partidos políticos en contra del incumplimiento del Acuerdo de Participación establecido en el artículo 74bis de este Código.”

De lo transcrito se advierte que la Legislatura local establece una nueva “modalidad” de gobierno de coalición, **como facultad de los partidos políticos**, al registrar una coalición electoral o candidatura común, en caso de que la persona postulada para asumir la Gubernatura resulte electa. En este sentido, dicha modalidad sí guarda relación con la materia electoral.

En efecto, el exceso de la facultad reglamentaria estriba en que, se violenta lo previsto en el artículo 40 de la Constitución Federal, al permitir a los partidos políticos decidir o involucrarse en la formación de un gobierno de coalición, cuando que, tal potestad esta reservada exclusivamente para los titulares del ejecutivo, es decir, para las personas que ya accedieron al cargo, pues precisamente, es a partir de su ejercicio, que el titular del ejecutivo puede decidir, si para lograr una mayor estabilidad, gobernabilidad o facilidad en la aplicación de

las políticas públicas, opte por un gobierno de coalición que involucre a las fuerzas políticas.

Pero de ninguna forma, esta potestad puede ser trasladada a las dirigencias de los partidos políticos, ya que, a diferencia de los cargos de representación popular que pertenecen al poder legislativo, la facultad de nombrar a las carteras del ejecutivo obedece a una potestad administrativa que no puede supeditarse o atarse al ámbito electoral.

Ciertamente, en un primer momento, y derivado de la voluntad del constituyente local al reformar los artículos 61, fracción LI, y 77, fracción XLVIII y se adicionan la fracción LII al artículo 61 y la fracción XLIX al artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, previeron que solo el titular del Ejecutivo estatal es decir la Gobernadora o Gobernador electos del Estado de México pueden optar por un gobierno de coalición.

Sin embargo, rompiendo con la facultad reglamentaria del Constituyente local, la Legislatura permanente, pretende establecer una modalidad para el Gobierno de coalición no prevista en su constitución. Esto es, las normas constitucionales de ninguna manera permiten que la Legislatura del Estado pueda establecer la figura del gobierno de coalición desde el momento en que se haya conocido el triunfo electoral de los partidos de una coalición electoral para Gobernador del Estado, ni autoriza a registrar Acuerdos específicos de participación desde la fecha en que se registren también los convenios electorales.

Es inconstitucional que las disposiciones impugnadas señalen que en los Acuerdos de Gobierno de Coalición se establezcan cuestiones relativas al establecimiento de la forma en que los partidos que integren las coaliciones o candidaturas comunes participarán en la conformación de las dependencias del

ejecutivo y sus órganos auxiliares, así como de la definición de la agenda legislativa desde antes del inicio de mandato del Gobernador, pues ninguna designación de titulares de dependencias o de órganos desconcentrados o descentralizados es posible sino hasta el inicio del periodo de mandato del Gobernador, por lo que antes de ese momento toda designación sería irregular.

Dentro de este supuesto el artículo 74 bis, reformado rompe con dicho modelo ya establecido por la Constitución Local, esto en razón de facultar a los Partidos Políticos de proponer un gobierno de coalición.

Con la adición de dicho artículo se establece un segundo momento por el cual es posible optar un gobierno de coalición es decir una persona postulada para asumir o contender al cargo de gobernadora o gobernador, por lo cual dicha reforma contraviene a lo establecido por el mismo legislador en su ordenamiento legal supremo.

Sirve de anterior la Tesis P.J. 22/2022 (10a.)

“CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DEBE OBSERVAR EL MARCO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La Constitución de cada Estado de la República constituye un orden jurídico específico y superior al resto de las leyes y normas de cada entidad; de ahí que los Congresos respectivos tienen libertad de configuración para establecer tanto el diseño de su órgano de control constitucional local, como los respectivos medios de control e impugnación que garanticen la superioridad constitucional en el Estado, sin que ello implique, por sí mismo, una afectación a la esfera de los Poderes Legislativo o Ejecutivo estatales, siempre que se observe,

desde luego, el marco federal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En ese orden de ideas, derivado de que la Constitución Local ya prevé y limita lo referente al gobierno de coalición, lo pertinente debió haber sido reformar o adicionar esas disposiciones de dicha Constitución para así, si se consideraba adecuado, optar por dos momentos mediante los cuales se pudiera optar por un gobierno de coalición. Lo irregular en las modificaciones impugnadas recae en que no se respetó el debido proceso legislativo al dejar de lado lo dispuesto en la Constitución Local y dar paso directamente a una reforma al Código Electoral del Estado.

Así, en primera instancia, partiendo del siguiente supuesto normativo, se debió percibir la posibilidad de realizar modificaciones a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, tal como lo dicta el artículo 148, que a consideración se transcribe:

“TITULO NOVENO De la Permanencia de la Constitución

CAPÍTULO PRIMERO De las Reformas a la Constitución

Artículo 148. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella, se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde tales reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos. La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

La convocatoria que haga la Presidencia de la Legislatura o la Diputación Permanente, para la reforma o adición constitucional, será emitida cuando menos con siete días previos a la sesión deliberante, donde se discutirá, para la cual no procederá dispensa de trámite.”

Ahora bien, al realizar un abordaje absoluto del proceso Legislativo y partiendo del Artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y/o del Artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece el derecho de los diputados a presentar iniciativas de ley o decreto, sin embargo, éstas deberán ser realizadas en cumplimiento a la Constitución Estatal que a la letra establece:

“Artículo 56.- Para la adición, reforma o derogación del articulado o abrogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites que para su formación”.

Es decir, deberán obedecer a los requisitos previstos en el Capítulo VII, Del Proceso Legislativo de la ya citada ley:

“Artículo. 78. - El trámite al cual se someterán las iniciativas de ley y decreto, así como las proposiciones que no tengan tal carácter, se ajustará a la normatividad prevista en la Constitución, la ley y el reglamento.

Sin embargo, resulta de vital importancia el recordar la jerarquía normativa, ya que en el caso que se estudia, fue vulnerada la formalidad esencial del proceso Legislativo en cuanto a la reforma de la normativa secundaria al no atender los supuestos previstos a nivel constitucional, puesto que las adiciones y reformas

impugnadas debieron haberse realizado en torno a la Constitución Local, para así dar paso a una reglamentación de la misma a través del Código Electoral del Estado.

Apoya a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 177210, que a continuación se cita:

PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN.

La validez de las disposiciones reglamentarias o administrativas, para efectos de aplicación, interpretación o integración normativa, se encuentra supeditada a que guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate y se sujeten a los principios jurídicos que emergen directamente de la ley, de manera tal que aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley ni oponerse a sus lineamientos normativos, pues deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal. En otras palabras, las disposiciones reglamentarias o administrativas, antes que oponerse, deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las leyes las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema razón de validez del orden jurídico. Por consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal exegética que de manera sistemática armonice los preceptos relativos, frente a una interpretación puramente literal que soslaye una adecuada

integración jurídica y se desentienda de la supremacía de las normas, de la cual depende precisamente su validez¹.

Los preceptos en análisis quebrantan la garantía de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, ya que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo.

Asimismo, de la lectura hecha a la exposición de motivos de la reforma combatida se observa:

“Es que, en este sentido, surge la necesidad de que en el Estado de México desde el registro de candidaturas comunes se integre un programa de gobierno y un convenio, que establezca la forma en como gobernará la candidata o el candidato en el caso de resultar electa o electo, así como la designación de Secretarías de Gobierno, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, o equivalentes, de acuerdo a la forma establecida en el convenio respectivo, **a efecto de garantizar la participación permanente y continúa de los partidos políticos que formaron parte de la alianza electoral, en la responsabilidad de involucrarse en la administración pública, a través de su representación en las diversas Secretarías, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, o equivalentes, que integren el gobierno correspondiente, lo que permitirá transitar al ejercicio democrático y plural en la estructura administrativa del poder ejecutivo estatal o municipal. Lo anterior, sin menoscabar en ningún momento las facultades que expresamente le han sido conferidas a la Gobernadora o Gobernador y a las o los Presidentes Municipales, pues**

¹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1453, tesis I.2o.P.61 P, de rubro: "SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO."

lo que se busca a través de esta iniciativa es garantizar la participación, continúa, plural e incluyente de todos y cada uno de los partidos políticos, que pese a sus postulados políticos o ideológicos que los representan, manifestaron su deseo de hacer uso de la figura jurídica de una candidatura común, cuyo elemento esencial se basa en la idea de postular a una misma candidata o un mismo candidato que los represente a todos, ya sea tomando en cuenta su trayectoria, arraigo a la comunidad, condiciones propias de la demarcación o cualquier otra circunstancia. Ello con el fin de tener las bases de un gobierno de alianza que abra la posibilidad de generar nuevas ideas, propuestas, alternativas, visiones y soluciones que puedan resultar viables, al unir a otras fuerzas políticas que coadyuven y caminen hacia una misma dirección: el bienestar de sus habitantes, y que permita alcanzar una gobernabilidad plena y democrática, mediante la participación, continúa, plural e incluyente en el Gobierno de todos y cada uno de los partidos políticos que conformaron una alianza electoral.

Por ende, la norma combatida regula deficientemente la figura de gobierno de coalición, pues debió haber entendido que los convenios y acuerdos de gobierno de coalición solo pueden tener el carácter de carta de intención, y no como una imposición al candidato a Gobernador.

Aunado al hecho de que trastoca la esencia y finalidad de optar por una coalición o candidatura común, que como se explicó es temporal (concluye una vez que da término el proceso electoral) y respecto de la cual, por lo que hace a las coaliciones, su regulación reservada a la federación.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ, mediante el cual se impugna el Decreto Número 91, en su porción normativa referente a la adición del artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México. Lo cual lesiona el principio de división de poderes contenido en el artículo 116 constitucional, mismo que resulta ser garante del sistema democrático.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Son los artículos 1o., 116 primer y segundo párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos primero y segundo transitorios del *“Decreto número 91 por el que se reforma la fracción III del artículo 202, la fracción XVIII del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407; Se adiciona el artículo 74 bis, la fracción XIX del artículo 390, la fracción IV del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México”*, así como los demás preceptos que invoco en lo que sigue.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

México como país soberano y democrático, estableció las bases de su organización política y estructura gubernamental tomando como base el principio de la división de poderes, mediante el cual se determinó la descentralización en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado, y prohibió la reunión en una o más personas de los citados poderes, esto con la finalidad de mantener un equilibrio de fuerzas, mediante una serie de pesos y contrapesos, cuyo objetivo es garantizar la protección de las libertades individuales, evitar los abusos de autoridad, así como la instauración de gobiernos autoritarios.

De esta forma el ejercicio del Poder Soberano se divide en tres: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cada uno con su ámbito de acción, estructura organizativa, funciones y responsabilidades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que expresamente ha determinado las competencias para cada uno de los poderes del Estado, mediante el artículo 116 constitucional, mismo que señala que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas que el mismo precepto constitucional detalla para la organización de sus propios poderes:

“Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:...”

Al respecto, la división de poderes a nivel federal se constituye de la siguiente forma:

Poder Ejecutivo federal

Se compone del conjunto de órganos estatales en los que se confía la administración pública, y es encabezado por el Presidente de la República.

El Presidente, es el encargado de la administración de la federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional. Para desempeñar sus funciones, se auxilia de diversas Secretarías de Estado.

Poder Legislativo federal

Este poder se encuentra depositado en el Congreso de la Unión, el cual es un organismo bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que tiene como función principal la emisión de las leyes, en sentido material y formal.

La Cámara de Diputados, es un órgano integrante del Congreso de la Unión dentro del sistema bicameral, adoptado por la Constitución en su artículo 50, y que tiene un origen popular directo como representante del pueblo mexicano, está conformada por diputados federales, que fungen como representantes del pueblo mexicano ante el Estado y duran en su cargo un periodo de 3 años.

La Cámara de Senadores, es un órgano integrante del Congreso de la Unión, que tiene como función principal la representación de los Estados ante la Federación, está conformada por Senadores de cada Estado que son elegidos por elección popular y duran en su cargo 6 años.

Poder Judicial de la federación

Este poder tiene como objetivo la protección de los derechos de la población, haciendo que las obligaciones y responsabilidades de la sociedad se cumplan en todo momento, y se conforma de un conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia, estos son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.

De la misma manera, en la Entidad que nos ocupa, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 34 replica lo mandatado en la Constitución Federal, por lo que hace a la división de poderes al tenor siguiente:

“TÍTULO CUARTO

DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA DIVISIÓN DE PODERES

Artículo 34.- *El Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”*

De la porción transcrita, debe señalarse que, a su vez, la misma Constitución local en su artículo 38 establece que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado.

Bajo esa perspectiva, el artículo 61 de la normativa previamente citada, dispone las facultades y obligaciones del Congreso Local, del cual se puede advertir la facultad del legislativo, entre otras, de expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno; así como de examinar y opinar sobre el Plan de Desarrollo del Estado que le remita el Ejecutivo:

“SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA

Artículo 61.- *Son facultades y obligaciones de la legislatura:*

I. Expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno;

II. Examinar y opinar sobre el Plan de Desarrollo del Estado que le remita el Ejecutivo;

(...)”

De lo expuesto se desprende que, esencialmente el Poder Estatal de referencia tiene la finalidad de legislar en los ramos que conforman el régimen interior de las entidades federativas; constitución que atiende a la obligación que tiene la Federación o el Estado de cubrir las necesidades político-sociales que se generan día con día en la propia ciudadanía, misma que, a través del acto democrático del voto, deposita tal obligación en la Legislatura, ejerciendo así su soberanía.

Bajo ese contexto, para que los legisladores puedan atender a las atribuciones y obligaciones que expresamente le son encomendadas por la Constitución Federal y local, se le faculta al Poder Legislativo del Estado para expedir su Ley Orgánica y todas las normas necesarias para el debido funcionamiento de sus órganos y dependencias.

En ese sentido, resulta de suma importancia mencionar que, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada grupo parlamentario presentará una agenda legislativa, la cual se abordará en la primera sesión de cada periodo ordinario; como se transcribe en el párrafo siguiente:

"ARTICULO 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

[...]

4. En la primera sesión de cada periodo ordinario, **cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa** que abordará durante el transcurso de éste.

5. El Secretario General hará publicar los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, **la agenda legislativa de los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste.**

[...]"

(Lo resaltado es de quien suscribe)

Por lo antes expuesto, es importante mencionar que la agenda legislativa debe atender de manera integral los problemas que existen en el Estado y los asuntos de carácter prioritario; asimismo, **está condicionada a atender los sucesos de la realidad social**, a los conflictos que surgen en la actualidad, por lo que al pretender “garantizar la participación permanente y continúa de los partidos políticos que formaron parte de la alianza electoral, en la responsabilidad de involucrarse en la administración pública, a través de su representación en las diversas Secretarías, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, o equivalentes, que integren el gobierno correspondiente, lo que permitirá transitar al ejercicio democrático y plural en la estructura administrativa del poder ejecutivo estatal o municipal”, tal y como se manifestó en la exposición de motivos de la reforma de mérito, **se está limitando la posibilidad y la obligación de atender las necesidades actuales de la población mexiquense y las que surjan de forma cotidiana.**

A nivel local, la normativa conducente que tiene por objeto la regulación, estructura, organización, atribuciones y funcionamiento del Poder Legislativo es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; misma que, en su artículo 38 Ter prevé como principio rector para el ejercicio del proceso legislativo, la aplicación de mecanismos de Parlamento abierto, guiados por los principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, evaluación legislativa y participación ciudadana.

En tal virtud, la porción normativa citada establece que, con el objeto promover una democracia participativa, **las Diputadas y los Diputados fomentarán agendas de apertura e interacción con la sociedad.**

Tomando en cuenta lo anterior, el capítulo V prevé las disposiciones generales de los Grupos Parlamentarios, conceptualizando a estos de igual manera que a nivel Federal, como el conjunto de diputados integrados según su filiación de

partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Legislatura.

Parte del ejercicio de su cargo, en el caso de los representantes populares como lo constituyen los legisladores, se debe de atender a una agenda legislativa, la cual constituye una dinámica institucional del Congreso local donde se analiza lo correspondiente a las iniciativas de ley, modificaciones abrogaciones o reformas del marco jurídico de la entidad, o acuerdos que son competencia del mismo poder.

Bajo este hilo conductor, el actuar de los legisladores basado en una agenda legislativa guiado por los principios de Parlamento abierto, parte de la premisa de la autonomía de los legisladores para tomar decisiones, encaminada a una facultad expresa de los propios diputados para coordinar las tareas legislativas, políticas y administrativas de la Legislatura en turno, ello en aras de mantener la relación de legitimidad que les une con las personas para las que gobierna, así como de atender las demandas ciudadanas que se presentan en el contexto social actual; y no así en intereses partidistas, pactados en un acuerdo previo, como se pretende en la normativa cuya invalidez se interpone.

Bajo ese contexto, resulta evidente que la adición del artículo 74 bis al Código Electoral del Estado de México, específicamente en la parte en la que señala *“...podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa”*, resulta una limitante Poder Ejecutivo Estatal de sólo tener participación de actuación legislativa respecto de los asuntos que se hubieren fijado en el Acuerdo, impidiendo así hacer frente a las necesidades sociales que surjan de momento a momento.

Por tanto, la figura que emite el legislador local en materia de coaliciones electorales y candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, referente a la inserción de un acuerdo de participación cuyo propósito versa en un consenso en el que se establezca la definición de la agenda legislativa del Congreso local, resulta inconstitucional, habida cuenta que, la coordinación de las tareas legislativas para atender a las necesidades de la realidad social son atribuciones expresamente conferidas a las y los Diputados locales, lo anterior a efecto de cumplir lo encomendado en la Constitución, ello bajo los principios que entraña un parlamento abierto.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su Sección Segunda denominada "De las Facultades y Obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del Estado", en su artículo 77, fracción XIV, en lo conducente establece:

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del Estado:

XIV. Nombrar y remover libremente a las personas servidoras públicas del Estado cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes. Los nombramientos que realice favorecerán el principio de igualdad y equidad de género;

Ahora bien, en la misma Sección Segunda denominada "De las Facultades y Obligaciones de la Legislatura", de la misma Constitución Local, específicamente en su artículo 61, fracción LI, establece en lo conducente:

Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

(...)

LI. Ratificar los nombramientos que el Gobernador haga de los servidores públicos que integren su gabinete, cuando opte por un gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones citadas, se advierte que por una parte, **la Gobernadora o el Gobernador del Estado de México, podrá nombrar y remover libremente a las personas servidoras públicas cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por la Constitución local**, favoreciendo en todo momento el principio de igualdad y equidad de género y por otra parte, **será facultad y obligación del poder legislativo, ratificar los nombramientos que el Gobernador haga de los servidores públicos que integren su gabinete**, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

En ese sentido, la norma constitucional de la entidad federativa de referencia, que se considera transgredida, otorga la facultad y la potestad a la Gobernadora o al Gobernador Constitucional del Estado de México, según sea el caso, a elegir **libremente y sin limitación alguna a las personas que serán parte de su gabinete**, quienes entre sus funciones está apoyar las funciones del Ejecutivo Estatal, atendiendo al principio de paridad de género.

Lo anterior resulta así, toda vez que, al ser los encargados del funcionamiento de la estructura del poder ejecutivo en la entidad, resulta de gran relevancia que se forme por personas que la Gobernadora o Gobernador considere expertas en las diversas ramas de la administración pública estatal, las cuales indudablemente deben de ser personas de confianza para el apto funcionamiento del mecanismo ejecutivo.

Por su parte, las porciones normativas de las cuales se solicita su invalidez por contravenir las disposiciones constitucionales citadas con antelación, en lo conducente establecen:

Artículo 74 bis: *En el caso de coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.*

El Acuerdo de Participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales.

El Acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate.

Artículo 202. ...

I. y II. ...

III. *Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios de coaliciones, fusión y los acuerdos de participación.*

IV. a X. ...

Artículo 390. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este Código, de conformidad con lo previsto en Libro Séptimo del mismo.

XIX. Las demás que le otorga este Código.

Artículo 407. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales sólo será procedente el recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por:

I. a III. ...

IV. En cualquier momento, los partidos políticos en contra del incumplimiento del Acuerdo de Participación establecido en el artículo 74 bis de este Código.

Ahora bien, del análisis de los preceptos normativos que se reforman y adicionan publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México en el Tomo CCXIV, número 60 el viernes 30 de septiembre del año en curso, se advierte que contrario a lo que sostiene la Constitución local del Estado de México y la propia naturaleza otorgada por el constituyente local a quien presida el poder ejecutivo en la entidad, limitan las facultades de la Gobernadora o Gobernador de nombrar a los funcionarios públicos que han de fungir como parte de su gabinete y asimismo, limitan las facultades y obligaciones del poder legislativo de ratificar los nombramientos que la Gobernadora o Gobernador haga de los servidores públicos que integren su gabinete, pues establecen que en el supuesto de ir en coalición o candidatura común para postular personas candidatas a Gobernadora o Gobernador, los partidos que la integran tienen la posibilidad presentar lo siguiente:

1. Un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares;

2. La definición de la agenda legislativa.

Por lo que hace al numeral 1, la porción normativa que lo aborda, es decir, la primera parte del artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México, violenta con la naturaleza jurídica que el constituyente atribuye al poder ejecutivo estatal en relación a que le otorga la libertad a la Gobernadora o Gobernador Constitucional a elegir de forma libre los servidores públicos que integran su gabinete, pues por el contrario, dicha porción normativa otorga la posibilidad de presentar un acuerdo por medio del cual se establezca la forma en que los partidos políticos coaligados o bien integrantes de una candidatura común participarán en la integración de las dependencias del poder ejecutivo y sus organismos auxiliares.

Dicho de otra manera, la porción normativa que se solicita se declare su invalidez, otorga la posibilidad de que en atropello y violentando los principios de libertad de la o del que presida el poder ejecutivo en la entidad federativa de referencia, previo a la toma de protesta, hayan repartido la forma de participación de los partidos integrantes por lo que hace a la integración de las dependencias y sus organismos auxiliares, lo cual abre la puerta a que de manera por demás aleatoria y unilateral, inclusive atendiendo a intereses personales por encima del interés social común se designen dicha participación, sin que pase desapercibido que obedecería a la limitación de las facultades y aptitudes previstas en la constitución local y resultan contrarias a los principios del sistema electoral mexicano, a saber, el principio de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ, mediante el cual se impugna la **fracción XVIII**, del artículo 390 del Código Electoral del Estado de México, que dispone una atribución adicional al Tribunal Electoral del Estado de México que consistente en la competencia para resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de dicho código, la cual colisiona frontalmente con lo previsto por la fracción XLVIII, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Violando con ello, el artículo 116, párrafos primero y segundo, así como lo previsto por la fracción IV, inciso c) del citado precepto constitucional, en tanto que, la normativa constitucional local atribuye las controversias que emanen de los acuerdos a través de los cuales se opte por un gobierno de coalición.

Para demostrar lo anterior, se inserta el contenido textual de los dispositivos invocados:

CONSTITUCIÓN FEDERAL

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las **elecciones**

y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

(...)

CONSTITUCIÓN LOCAL.

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del Estado:

(...)

XLVIII. Optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes en la sesión del pleno de la Legislatura donde se discuta. Si la Legislatura se encontrara en receso la Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura del Estado a un periodo extraordinario. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición

(...).

CÓDIGO ELECTORAL

Artículo 390. Al Pleno del Tribunal Electoral le corresponden las atribuciones siguientes:

(...)

XVIII. Resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los Acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este Código, de conformidad con lo previsto en Libro Séptimo del mismo.

Interpretando sistemática y funcionalmente los artículos constitucionales federal y local se obtiene que tanto el constituyente federal como el estatal, delimitaron claramente la competencia de cada uno de los poderes, dividiendo sus funciones acorde a su naturaleza, por lo que, se estima, resulta inconstitucional otorgar competencia al tribunal electoral, para conocer funciones específicamente establecidas en favor del poder legislativo.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Son los artículos 1o., 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 40, 41 párrafos primero y tercero, base I, 116 fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con otras normas supremas que se invocan en lo que sigue.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

En primer lugar, el texto constitucional federal acota la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, al radio de aplicación que abarca esa rama del Derecho, por lo que no es dable extender su jurisdicción hacia otras materias como lo es la parlamentaria.

Al respecto, es de explorado derecho que la jurisdicción electoral se agota con la resolución del medio de impugnación que confirma la validez de la elección emitida por la autoridad administrativa electoral.

En ese sentido, tenemos que el artículo 77, en su fracción XLVIII, de la Constitución Local, establece como facultad de la **Gobernadora o Gobernador, optar en cualquier momento por un gobierno de coalición** con uno varios de los partidos políticos representados en la legislatura estatal.

De acuerdo con esa fórmula, tenemos que los elementos que la componen, son los siguientes:

1. La creación de un gobierno de coalición es una atribución potestativa, no obligatoria.
2. Optar por un gobierno de coalición es una decisión de la persona titular del ejecutivo estatal.
3. Dicho pacto puede llevarse a cabo con uno o varios partidos que cuenten con representación en la legislatura local.

Por tanto, es claro que las actuaciones que emanan de la persona titular ejecutivo de acuerdos a las atribuciones conferidas, escapan del escrutinio del Tribunal Electoral del Estado de México, en tanto que **no atienden a la materia electoral**.

Por el contrario, el constituyente estatal otorgó la potestad de verificar su contenido al poder legislativo a través de la aprobación del convenio y el programa que regularan al gobierno de coalición propuesto, por parte de la mayoría de las diputadas y diputados presentes en la sesión del pleno.

De tal manera que, no es dable, jurídicamente, que en una ley secundaria se invalide implícitamente el texto constitucional y se traslade esa atribución a un poder diverso.

Lo anterior, cobra relevancia, porque de acuerdo con la fracción I, del artículo 405 del Código Electoral, el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar la legalidad y certeza de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales locales y de consulta popular.

Por lo que, si el convenio para instalar un gobierno de coalición proviene en primer lugar de la gobernadora o gobernador, y su aprobación y regulación emana del poder legislativo, entonces es evidente, que el tribunal electoral no puede conocer de las controversias originadas por su incumplimiento, toda vez que las autoridades anteriores no pertenecen al ámbito electoral. Así como tampoco, el convenio de un gobierno de coalición se genera -acorde al modelo constitucional local- durante el proceso comicial.

En ese sentido, la adición de una facultad al tribunal electoral local, prevista constitucionalmente en favor de la legislatura, vulnera las garantías de seguridad jurídicas e invade competencias entre poderes, prorrogando indebidamente, el alcance jurisdiccional del poder judicial en detrimento del poder legislativo.

En las relatadas condiciones, y al ser fundado el presente concepto de invalidez, solicito de ese Alto Tribunal se pronuncie al respecto.

A efecto de acreditar lo anterior, y aunado a que se trata de hechos notorios, se ofrecen las siguientes

PRUEBAS:

1.- LA DOCUMENTAL, consistente en **ejemplar o copia del Diario Oficial del Gobierno del Estado de México**, correspondiente al No. 60, Tomo CCXIV, publicado el 30 de septiembre de 2022, y consultable en el enlace:

<https://legislacion.edomex.gob.mx/calendario/dia/2022-09-30>

Medio de prueba que acredita la existencia, inconvencionalidad e inconstitucionalidad del Decreto 91 expedido por la actual Legislatura del Congreso del Estado de México, "POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 202, LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 390, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 407 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 74 BIS, LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 390, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 407 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO", en la parte que es motivo de impugnación; decreto que se contiene en las páginas de la 62 a la 67 de dicha publicación oficial.

pues contiene las normas cuya invalidez se plantea en esta acción de inconstitucionalidad.

2.- **LA DOCUMENTAL**, consistente en constancia o certificación con la que considero acredito que soy el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de **MORENA**, a efecto de hacer valer la personería con que promuevo la presente acción de inconstitucionalidad.

3.- **LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA**, en todo lo que sirva para estimar fundados los conceptos de invalidez en el presente medio de impugnación, y que hago consistir en las deducciones lógico jurídicas que se desprendan de las normas electorales, del ordenamiento jurídico y de los razonamientos que ese Tribunal Pleno construya a partir de los hechos conocidos a fin de obtener la interpretación conforme o la invalidez de las normas generales controvertidas.

4.- **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, consistente en todas las constancias que obren en el expediente que se forme con motivo del presente

5/

juicio, en todo lo que sirva para declarar fundados los conceptos de invalidez, así como las que, conforme al principio de adquisición procesal se agreguen al expediente y se relacionen con el presente asunto, en caso de acumulación.

Por lo expuesto y fundado, de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener a **MORENA** por interponiendo acción de inconstitucionalidad en los términos del presente escrito, y por reconocida la personalidad de quien suscribe; asimismo tener por designados y acreditados delegados en el presente asunto.

SEGUNDO.- En su oportunidad, dar vista a las autoridades responsables para enterarlos de ésta impugnación y requerirlos para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 de la citada Ley Reglamentaria, desahogando el procedimiento respectivo.

TERCERO.- Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de las mismas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México es Parte, sin perjuicio de interpretación conforme y *pro persona*, que en su caso procedieren.

LA ESPERANZA DE MÉXICO

MARIO DELGADO CARRILLO

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA

018114

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 NOV 3 AM 8 42

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón Judicial de fecha
28 de Octubre 2022 en (51) fojas con.-
(1) certificación de registro en (1) foja.
(5) trasladados.

Eli